

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la transmisión de los datos contenidos en un expediente administrativo de declaración de incapacidad permanente a aquella persona a la que dicho expediente se refiere, que en consecuencia tiene la condición de interesado en el mismo, aun revelando información referida a los componentes del equipo de valoración de incapacidades que tomaron parte en la reunión en la cual se formuló el preceptivo dictamen propuesta que sirve de base a la resolución por la cual se declara su posible derecho a pensión, o si dicha cesión precisaría del consentimiento de dicha persona distintas del interesado.

La transmisión así planteada, al poder incorporar datos de terceros, implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso, según el artículo 11.2 a) cuando exista una norma con rango de Ley que autorice la cesión de los datos.

Como se ha indicado, el solicitante ostenta la condición de interesado en el procedimiento al que se refiere la solicitud de información, por lo que su petición puede encontrar fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 30/1992, que reconoce en su apartado a) el derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

La condición de interesado en el procedimiento administrativo viene recogida en el artículo 31 de la citada Ley 30/1992, cuyo apartado 1 dispone que:

*“Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:*

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.*
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.*
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.”*

Pues bien, en el presente caso se indica en la consulta que las solicitudes se refieren a la información contenida en un expediente administrativo de declaración de incapacidad permanente del propio solicitante, en el que lógicamente esa persona tendrá la condición de interesado, por lo que debe considerársele reconocido el derecho establecido en el artículo 35 a) de la Ley 30/1992, sin que exista contradicción entre dicho precepto y lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, al suponer precisamente la norma citada una excepción legal al consentimiento del interesado para la cesión de los datos, amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

En consecuencia, la previsión contenida en el citado precepto supone una excepción legal al consentimiento del interesado para la comunicación de sus datos de carácter personal, de modo que la cesión planteada en la consulta se encontraría amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

La condición de interesado en el procedimiento hace innecesario acudir al análisis del artículo 37 de la Ley 30/1992, que podría fundar la transmisión de los datos al amparo del derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros.

Por tanto, la cesión planteada en la consulta se encuentra amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 35 a) de la Ley 30/1992, al haber participado el consultante en el proceso selectivo a cuyo expediente se solicita el acceso.

En todo caso, y en cuanto al posible uso posterior de los datos que pudiera ser llevado a cabo por el interesado, debe recordarse que el mismo se



encuentra vedado por el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo primer inciso recuerda que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. De este modo, el interesado únicamente podría emplear los datos obtenidos para la garantía de sus derechos como interesado en el procedimiento o para la interposición del correspondiente recurso contra la resolución finalmente adoptada, pero no para finalidades distintas e incompatibles con la anterior.